

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

Centro de Educación para el Desarrollo

Área de formación en Responsabilidad Social

Formato de construcción del plan de trabajo vinculado al Proyecto Social de Formación

IDENTIFICACIÓN

Autoría pública

José Carlos Gómez

ID

Nombre del proyecto social

Humanidades Digitales

Parte I. Guía multidimensional

Esta guía le permitirá profundizar en las problemáticas de las comunidades donde llevará a cabo su práctica en Responsabilidad Social, para una comprensión integral de las realidades sociales. Al analizarlas podrá conectarlas con dinámicas locales, nacionales y latinoamericanas, y adoptar una perspectiva multidimensional que reconozca interconexiones y particularidades. Así podrá identificar las causas de los problemas y proponer soluciones más efectivas y sostenibles.

La guía también le ayudará a elaborar su plan de trabajo, alineando las estrategias de intervención de UNIMINUTO con los objetivos de la organización social con la que colaborará y fortaleciendo el Proyecto Social de Formación de su elección.

¿Qué debe hacer? Diligencie las dos problemáticas siguiendo estas indicaciones:

1. Identificación de problemáticas: seleccione dos problemáticas relevantes en el contexto de su práctica y del Proyecto Social de Formación.
2. Análisis en profundidad: describa cada problemática y analícela a nivel local, nacional y global.
3. Impacto en la comunidad: identifique las causas (históricas, socioculturales, políticas y económicas) y los efectos (sociales, culturales, ambientales y políticos).
4. Conexión con el proyecto: asegúrese de que sus estrategias se alineen con los objetivos del Proyecto Social de Formación.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

5. Enfoque reflexivo y con fuentes: sustente la información en fuentes e interprétela críticamente, mostrando cómo las dinámicas globales influyen en lo local y nacional, y viceversa.

TEMÁTICA ESCOGIDA: EDUCACIÓN FINANCIERA Y TOMA DE DECISIONES ECONÓMICAS RESPONSABLES

PROBLEMÁTICA 1

Nombre de la problemática

Enuncie de forma breve la problemática seleccionada.

Insuficientes conocimientos y hábitos de educación financiera para tomar decisiones responsables sobre presupuesto, ahorro y crédito.

Análisis a nivel local · mínimo 700 palabras

A partir de la situación identificada en el territorio o comunidad, ubique los principales hallazgos que permiten caracterizarla a nivel local. Apóyese en informes, datos estadísticos y los documentos sugeridos.

La primera problemática se ubica en Neiva y, de manera más amplia, en el departamento del Huila, tomando como comunidad inmediata a personas adultas vinculadas con la entidad financiera donde trabaja el estudiante: asesores de crédito, compañeros de oficina, clientes y familiares o conocidos que consultan decisiones sobre el manejo del dinero. Esta delimitación es pertinente porque permite combinar el conocimiento técnico disponible en el lugar de trabajo con una intervención de responsabilidad social que no se limita a promocionar productos financieros. El interés central es fortalecer capacidades para elaborar presupuestos, controlar gastos, ahorrar, comprender el costo del crédito y reconocer riesgos de fraude. La observación inicial del estudiante, por su labor como analista financiero, sugiere que muchas consultas cotidianas se producen cuando la decisión ya está avanzada: la persona pregunta cuánto le prestan o cuál sería la cuota, pero no siempre parte de una meta definida, un registro de ingresos y egresos o una evaluación completa de su capacidad de pago. Esta percepción debe comprobarse mediante una encuesta diagnóstica al inicio del proyecto, pero constituye una señal válida para orientar la indagación local.

El contexto huilense muestra una situación que puede parecer contradictoria: existe una cobertura financiera alta, pero ello no garantiza que las personas usen los servicios con suficiente conocimiento. El Reporte de Inclusión Financiera 2024 indica que Huila se ubicó entre los departamentos con indicadores de acceso superiores al 98 %, mientras el uso de productos financieros fue aproximadamente 84,9 %. En productos de depósito, el acceso llegó a 97,1 % y el uso a 81,8 % (Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2025). Estos datos muestran que una gran parte de la población puede tener una cuenta, depósito o producto registrado, aunque una proporción menor lo utiliza activamente. Además, “tener” un producto no revela si el usuario comprende las tasas, comisiones, plazos, seguros asociados, consecuencias de la mora o mecanismos de reclamación. Por eso, en el ámbito local la problemática no debe formularse solo como falta de acceso al sistema, sino como insuficiencia de conocimientos, hábitos y criterios para transformar ese acceso en bienestar financiero.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

La encuesta nacional de preferencias de educación financiera ofrece indicadores útiles para construir una hipótesis local que después debe contrastarse en Neiva. El 56,1 % de las personas encuestadas afirmó realizar un presupuesto mensual, pero 42,1 % no lo hacía; apenas 45,4 % registraba sus gastos y solo 17,7 % utilizaba herramientas de manejo del dinero para hacer seguimiento. Asimismo, 44,7 % había ahorrado durante los doce meses anteriores y 41,7 % tenía una meta financiera. Entre quienes ahorraban, 75,7 % guardaba efectivo en casa, mientras 39,8 % dejaba parte del dinero en una cuenta de ahorro (Superintendencia Financiera de Colombia, 2024). Aunque estos resultados representan al país y no pueden atribuirse automáticamente a toda la población de Neiva, sí justifican preguntar en la comunidad local por prácticas concretas: si se anota cada gasto, si existe un fondo de emergencia, cómo se separan necesidades y deseos, qué se hace cuando el ingreso varía y dónde se guarda el ahorro.

En el entorno de una financiera, el desconocimiento puede hacerse visible al comparar la atención centrada en la aprobación del crédito con la educación previa a la decisión. Una persona puede conocer el valor de la cuota, pero no el costo total de la obligación; puede fijarse en el monto desembolsado sin considerar seguros, periodicidad, tasa efectiva, gastos de cobranza o efectos de un atraso. También puede aceptar varias obligaciones pequeñas que, sumadas, superan su margen mensual. El riesgo aumenta cuando los ingresos son informales o variables, situación frecuente en el comercio, los servicios y el trabajo independiente. Por ello, el análisis local debe incluir no solo conocimientos conceptuales, sino comportamientos: comparación de ofertas, lectura de contratos, cálculo de capacidad de pago, priorización de deudas, uso de tarjetas o cupos rotativos y reacción ante una emergencia económica.

Otra dimensión local es la influencia social. A nivel nacional, 63,5 % de los encuestados manifestó que los consejos de amigos o familiares influyeron en la elección de su último producto financiero (Superintendencia Financiera de Colombia, 2024). En una ciudad intermedia como Neiva, las redes familiares, laborales y vecinales pueden facilitar recomendaciones de confianza, pero también reproducir información incompleta, experiencias individuales o mitos: creer que toda deuda es negativa, que la cuota baja siempre implica una mejor opción, que guardar efectivo es necesariamente más seguro o que un prestamista recomendado por un conocido no representa riesgo. La intervención puede aprovechar esa misma dinámica de confianza: formar a asesores y participantes para que se conviertan en multiplicadores responsables, capaces de explicar conceptos con ejemplos sencillos y de remitir a fuentes oficiales.

La digitalización amplía las oportunidades y los riesgos. Los depósitos de bajo monto, aplicaciones y pagos digitales facilitan transacciones, pero exigen habilidades para proteger datos, verificar enlaces y reconocer ofertas falsas. La encuesta de la Superintendencia encontró que 57,8 % no estaba seguro de identificar correos con enlaces fraudulentos, 65 % no sabía reconocer el robo de datos en sitios web y 48,6 % tenía dudas frente a mensajes de texto fraudulentos. En Neiva, donde las redes sociales y la mensajería son canales habituales para comunicarse con clientes, la educación financiera debe incluir seguridad digital, suplantación de identidad, falsos prestamistas, pirámides y manejo responsable de claves. El problema, por tanto, no es solamente matemático; combina alfabetización financiera, digital y ciudadana.

La población local tampoco es homogénea. Jóvenes que reciben su primer salario, trabajadores con ingresos variables, mujeres que administran el hogar, adultos mayores y personas con menor escolaridad pueden enfrentar barreras diferentes. Un contenido único y excesivamente técnico tendría poco impacto. La Superintendencia señala que 67,9 % de los encuestados podría dedicar dos horas semanales o menos a formarse y recomienda módulos breves de treinta a sesenta minutos, ejercicios aplicados, redes sociales y modalidades flexibles. Esto coincide con el formato del proyecto

Humanidades Digitales: seis publicaciones, una entrevista y un webinar pueden convertir conocimientos técnicos en recursos accesibles, visuales y reutilizables.

En síntesis, la problemática local se caracteriza por una brecha entre la amplia presencia de productos financieros y la capacidad real de usarlos para lograr estabilidad. El proyecto debe comenzar con un diagnóstico breve en la comunidad de Neiva, identificar los errores más frecuentes y medir cambios

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

antes y después de las actividades. La ventaja del contexto es que el estudiante dispone de experiencia laboral, asesores de crédito y una coordinadora con conocimientos especializados. La responsabilidad social consiste en emplear esas capacidades para prevenir decisiones perjudiciales, no para inducir contrataciones. Un plan basado en presupuesto, ahorro, crédito responsable y prevención del fraude puede producir un beneficio directo: que los participantes formulen una meta, reconozcan su capacidad de pago, comparen alternativas y adopten al menos un hábito verificable de organización financiera.

Análisis a nivel nacional · mínimo 700 palabras

Ubique los principales hallazgos que permiten caracterizar la problemática en el país. Apóyese en informes, datos estadísticos y los documentos sugeridos.

En Colombia, la insuficiencia de conocimientos y hábitos de educación financiera debe analizarse en un escenario de rápida expansión de la inclusión financiera. El Reporte de Inclusión Financiera 2024 registró que 96,3 % de los adultos tenía al menos un producto de depósito o crédito y que 83,9 % utilizó alguno de sus productos durante el último trimestre de 2024. También señaló que 37,1 millones de adultos contaban con productos de depósito, equivalentes al 95,8 % de la población adulta (Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2025). Estos avances son importantes porque reducen barreras de entrada y facilitan pagos, ahorro y acceso a servicios. Sin embargo, el crecimiento del número de cuentas no demuestra por sí solo que las decisiones sean informadas. La educación financiera se vuelve más necesaria cuando aumenta la variedad de productos, canales digitales, costos y mensajes comerciales que las personas deben interpretar.

Los hábitos básicos revelan la primera brecha. Según la encuesta realizada por la Superintendencia Financiera a 4.512 adultos de 153 municipios, 56,1 % elaboraba un presupuesto mensual y 42,1 % no lo hacía. Solo 45,4 % anotaba sus gastos y 17,7 % utilizaba herramientas para hacer seguimiento. El problema no consiste únicamente en desconocer una definición, sino en no convertir la información en rutinas. Una familia que no registra gastos tiene más dificultad para anticipar faltantes, reconocer consumos pequeños acumulados y determinar cuánto puede destinar al ahorro o a una cuota. De hecho, 44,8 % reconoció “gastos hormiga”, mientras 26,3 % identificó comportamientos poco saludables; entre estos aparecieron el gasto impulsivo, la dificultad para ahorrar, la falta de seguimiento y la ausencia de planificación (Superintendencia Financiera de Colombia, 2024).

La situación del ahorro y las metas confirma la vulnerabilidad. Solo 44,7 % había ahorrado durante los doce meses anteriores y 41,7 % manifestó tener una meta financiera. Entre quienes ahorraron, 75,7 % guardó efectivo en casa, 39,8 % utilizó una cuenta de ahorro y 17,5 % participó en grupos informales. El ahorro doméstico e informal puede responder a cercanía, confianza o facilidad, pero también implica riesgos de pérdida, robo, uso impulsivo o falta de rentabilidad. La ausencia de un fondo de emergencia obliga a muchas personas a depender del crédito, vender activos o pedir ayuda familiar cuando aparece un gasto imprevisto. Así, la baja planificación no es un asunto privado aislado: afecta la resiliencia de los hogares ante enfermedad, desempleo, variación de ingresos o aumento del costo de vida.

Las brechas de conocimiento son igualmente significativas. Las personas se calificaron, en promedio, con 4,5 sobre 10 en educación financiera; quienes tenían bachillerato o menos se asignaron 4,1, frente a 5,1 entre quienes contaban con educación superior. El 52,6 % afirmó no saber qué es la inflación y solo 29,6 % dijo saber calcular los intereses de un préstamo; 63,7 % reconoció que no podía realizar ese cálculo. No comprender la inflación dificulta evaluar el poder adquisitivo, comparar rentabilidades o proyectar metas. No entender los intereses impide estimar el costo de un crédito y distinguir entre tasa, cuota y valor total pagado. Estas limitaciones adquieren mayor importancia cuando las ofertas se presentan mediante mensajes

breves, simuladores
o publicidad que resalta el acceso inmediato y no siempre facilita una comparación integral.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

La toma de decisiones también está mediada por fuentes informales. El 63,5 % declaró sentirse influenciado por amigos o familiares al elegir un producto, mientras solo 6,2 % mencionó comparaciones especializadas o guías de compra y 14,8 % a un asesor independiente. Este patrón refleja que la confianza interpersonal es determinante, pero puede conducir a recomendaciones basadas en experiencias particulares. La educación financiera nacional debe fortalecer la capacidad de verificar información, consultar tasas y condiciones oficiales, hacer preguntas al asesor y reconocer conflictos de interés. No se trata de eliminar el consejo familiar, sino de complementarlo con criterios objetivos.

La prevención del fraude representa otra prioridad. Una parte amplia de la población no se siente segura para identificar falsos prestamistas, pirámides, correos con enlaces fraudulentos, mensajes engañosos o sitios que buscan robar datos. La digitalización de servicios y la expansión de teléfonos inteligentes permiten llegar a más usuarios, pero también incrementan la exposición a suplantaciones y ofertas no vigiladas. La alfabetización financiera debe incorporar prácticas de ciberseguridad: no compartir códigos, comprobar dominios y canales, desconfiar de pagos anticipados para desembolsos, revisar si una entidad está vigilada y denunciar captaciones ilegales.

Colombia cuenta con una base institucional para intervenir. El Decreto 457 de 2014 organizó el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera y creó una comisión intersectorial; posteriormente, el marco fue compilado en el Decreto 1068 de 2015. Además, la Superintendencia Financiera ofrece una plataforma gratuita con trece módulos sobre presupuesto, ahorro, crédito, sistema financiero, derechos del consumidor, protección de datos, seguros y otros temas. No obstante, la existencia de programas no garantiza su utilización: 69,5 % de las personas encuestadas no sabía que existían programas gratuitos y 82,8 % no sabía cómo acceder a ellos. La política pública enfrenta, entonces, un reto de comunicación, articulación y adaptación territorial.

La encuesta también evidencia una disposición positiva: 73,6 % considera importante adquirir conocimientos financieros. Sin embargo, 78,2 % nunca había buscado capacitación; las principales barreras eran falta de tiempo, recursos económicos, interés o herramientas tecnológicas. Por eso, una estrategia efectiva no puede depender exclusivamente de cursos largos. Debe integrar microaprendizaje, ejemplos cotidianos, acompañamiento, actividades presenciales y virtuales, contenidos en redes sociales y medición de resultados. La preferencia por Facebook, Instagram y TikTok muestra que las humanidades digitales pueden contribuir a democratizar saberes, siempre que la información sea clara, verificable y no publicitaria.

En conclusión, a nivel nacional la problemática surge de una brecha entre inclusión y capacidad. Colombia ha avanzado en cobertura, pero millones de personas todavía toman decisiones sin presupuesto, ahorro regular, metas, cálculo de intereses o herramientas de seguridad. La solución exige corresponsabilidad entre Estado, entidades financieras, sistema educativo, familias y comunidades. El plan propuesto se conecta con esta necesidad al usar recursos digitales y la experiencia laboral del estudiante para traducir conceptos en decisiones concretas. Su impacto será mayor si mide no solo alcance o reproducciones, sino aprendizaje y cambios de comportamiento: elaborar un presupuesto, comparar el costo de dos créditos, definir una meta y reconocer señales de fraude.

Análisis a nivel global (Latinoamérica) · mínimo 700 palabras

Ubique los principales hallazgos que permiten caracterizar la problemática a nivel latinoamericano. Tenga en cuenta informes y datos estadísticos.

En América Latina y el Caribe, la educación financiera se relaciona con una transformación acelerada del acceso a cuentas y servicios digitales. El Global Findex 2025 del Banco Mundial, construido con encuestas aplicadas en 2024, informa que 69,7 % de los adultos de la región tenía una cuenta, frente a

67,1 % en 2021 y 39,5 % en 2011 (Banco Mundial, 2025). La tendencia muestra un avance histórico, impulsado por la digitalización, los pagos electrónicos, programas de transferencias y nuevas ofertas financieras. Sin embargo, casi tres de cada diez adultos siguen sin cuenta y la tenencia no

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

garantiza que el producto se use de forma frecuente, segura o orientada a metas. La región comparte, por tanto, el desafío observado en Colombia:

ampliar el acceso y, al mismo tiempo, desarrollar capacidades para que la inclusión produzca bienestar.

Las desigualdades internas son relevantes. En 2024, la tenencia de cuenta alcanzó 65,9 % entre las mujeres, 59,5 % en el 40 % de menores ingresos, 58,4 % entre adultos fuera de la fuerza laboral y 65 % en zonas rurales. Estas cifras se encuentran por debajo del promedio regional y muestran que la educación financiera debe considerar género, ingresos, empleo y territorio. Una mujer que administra ingresos familiares informales, un trabajador rural con conectividad limitada y un joven que usa una billetera digital enfrentan necesidades distintas. Diseñar contenidos generales sin reconocer esas condiciones puede reforzar las brechas, porque las personas con mayor educación y recursos suelen aprovechar mejor la información disponible.

El ahorro regional refleja avances, pero también fragilidad. El Findex estima que 45,4 % de los adultos ahorró de alguna manera, mientras 28,8 % lo hizo formalmente y 8,4 % recurrió a clubes o mecanismos informales. Guardar dinero fuera del sistema puede responder a costos, desconfianza, distancia, hábitos culturales o ingresos irregulares. Los mecanismos comunitarios ofrecen disciplina y apoyo mutuo, pero pueden carecer de protección y transparencia. La educación financiera latinoamericana no debe descalificar estas prácticas; debe explicar sus riesgos y compararlas con alternativas formales, de modo que cada persona pueda decidir con conocimiento sobre liquidez, seguridad, rentabilidad y acceso.

El crédito presenta una dinámica semejante. En la región, 53,4 % de los adultos declaró haber pedido dinero prestado de alguna fuente, pero 28,5 % lo hizo formalmente (Banco Mundial, 2025). La diferencia indica una fuerte presencia de préstamos familiares, comercios, prestamistas y otros mecanismos informales. Cuando el crédito formal resulta difícil, lento o poco adecuado para ingresos variables, las personas pueden acudir a opciones más costosas o riesgosas. Sin educación financiera, la urgencia lleva a evaluar únicamente la rapidez del desembolso y no el costo total, la periodicidad, la capacidad de pago o las consecuencias de la mora. El problema no es la existencia del crédito, que puede financiar educación, vivienda, emprendimiento o emergencias, sino su uso sin análisis y la falta de alternativas justas.

La resiliencia económica es otra señal crítica. Solo 54,6 % de los adultos de América Latina y el Caribe consideró que no sería difícil reunir dinero adicional en treinta días; la proporción bajó a 47,5 % entre mujeres y 38,6 % en el grupo de menores ingresos. Además, únicamente 34,7 % afirmó que podría cubrir sus gastos por más de dos meses si perdiera su fuente principal de ingresos. Estos datos muestran que una parte amplia de los hogares vive con poco margen ante una crisis. En ese contexto, enseñar presupuesto no puede reducirse a una fórmula rígida. Debe ayudar a priorizar, adaptar metas a ingresos variables, construir reservas graduales, identificar redes de apoyo y evitar que una emergencia se convierta en una cadena de deudas.

La conectividad abre oportunidades de educación y riesgos de exclusión. En la región, 88,7 % de los adultos tenía teléfono propio y 69,8 % un teléfono inteligente; 63,3 % indicó protegerlo con contraseña. Los pagos digitales fueron realizados por 59,4 % y 42,5 % efectuó pagos digitales a comercios. Esta infraestructura permite ofrecer microcontenidos, simuladores y asesoría remota, pero la desigualdad en dispositivos, datos y habilidades digitales puede dejar por fuera a grupos vulnerables. Además, el uso de cuentas desde el celular exige comprender privacidad, suplantación, códigos de autenticación y fraudes. La educación financiera contemporánea debe integrar la alfabetización digital y no asumir que usar una aplicación equivale a comprender el producto.

En términos socioculturales, América Latina mantiene una combinación de confianza familiar, informalidad laboral y baja confianza institucional. Las

decisiones económicas suelen estar ligadas a redes de parentesco, reciprocidad y experiencias comunitarias. Esta característica puede ser un recurso pedagógico si se emplean testimonios, conversaciones y ejemplos cercanos, pero también puede difundir esquemas de captación, promesas de rentabilidad o créditos peligrosos. Las mediciones de capacidades financieras promovidas por CAF y la metodología OECD/INFE han insistido en

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

observar no solo conocimiento, sino comportamiento, actitudes, metas, resiliencia y bienestar. Esta perspectiva es adecuada porque saber una fórmula no garantiza que se aplique bajo presión, ante publicidad o frente a una necesidad familiar.

La región también enfrenta inflación, empleo informal, desigualdad y cambios tecnológicos que condicionan las decisiones. En periodos de aumento de precios, los hogares con menores ingresos destinan una mayor proporción a necesidades básicas y tienen menos espacio para ahorrar. La informalidad dificulta demostrar ingresos y acceder a productos apropiados; al mismo tiempo, la publicidad digital y las soluciones de crédito inmediato favorecen decisiones impulsivas. La educación financiera debe articularse con protección al consumidor, regulación, transparencia de precios y productos adecuados. Sería injusto responsabilizar exclusivamente al individuo por problemas producidos también por estructuras económicas y ofertas complejas.

El análisis latinoamericano permite comprender la conexión entre lo global y lo local. La expansión de cuentas y teléfonos observada en la región también se expresa en Huila; las brechas de ahorro, resiliencia, género e ingresos aparecen en las comunidades colombianas; y las redes digitales que facilitan educación también propagan fraudes. Por eso, el proyecto de Humanidades Digitales puede aportar a una necesidad regional desde una intervención pequeña y medible. Las publicaciones, el webinar y la entrevista no resolverán las desigualdades estructurales, pero sí pueden fortalecer la autonomía de una comunidad concreta, mostrar fuentes confiables y generar hábitos transferibles. La responsabilidad social se evidencia cuando el conocimiento profesional se convierte en un bien público accesible y cuando la intervención reconoce tanto las capacidades personales como las condiciones sociales que limitan las decisiones.

Causas: históricas, socioculturales, políticas y económicas · mínimo 700 palabras

Describa las razones y hechos históricos, socioculturales, políticos y económicos que originan el problema.

La insuficiencia de conocimientos y hábitos de educación financiera tiene causas históricas, socioculturales, políticas y económicas que se relacionan entre sí. No puede explicarse como simple falta de interés individual. Durante buena parte de la historia colombiana y latinoamericana, los servicios financieros formales estuvieron concentrados en ciudades, empresas y grupos con ingresos estables. Muchas familias resolvieron sus necesidades mediante efectivo, ahorro doméstico, préstamos familiares, tiendas, cooperativas, cadenas o prestamistas. Estas prácticas construyeron saberes comunitarios valiosos, pero también significaron que conceptos como tasa efectiva, seguro de depósitos, historial crediticio o derechos del consumidor no formaran parte de la experiencia cotidiana de amplios sectores. La expansión reciente de cuentas y canales digitales ocurrió más rápido que la formación necesaria para comprenderlos.

Una causa histórica adicional es la separación entre educación general y vida económica cotidiana. En numerosos hogares y espacios educativos se enseñaron operaciones matemáticas, pero no necesariamente cómo construir un presupuesto, leer un extracto, comparar créditos, calcular el efecto de una tasa o reconocer una oferta fraudulenta. El dinero se trató con frecuencia como un asunto privado del mundo adulto, sobre el cual no se conversa con niños y jóvenes. Como resultado, muchas personas aprendieron por ensayo y error, imitando hábitos familiares o reaccionando a crisis. Cuando esos aprendizajes se transmiten sin reflexión, se reproducen ideas como que ahorrar solo es posible con ingresos altos, que una cuota pequeña es siempre conveniente o que preguntar sobre dinero es señal de desconfianza.

Entre las causas socioculturales se encuentra precisamente la fuerte influencia del entorno cercano. La encuesta de la Superintendencia Financiera encontró que 63,5 % de los consumidores se sintió influenciado por amigos o familiares al elegir un producto. Esta confianza puede ser

positiva, pero
también sustituye la comparación técnica y la consulta de fuentes oficiales. Los consejos suelen basarse en casos particulares y pueden omitir costos, riesgos o diferencias entre situaciones. A ello se suman sesgos de comportamiento: preferencia por beneficios inmediatos, subestimación de gastos

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

pequeños, exceso de confianza, miedo a revisar deudas o tendencia a mantener hábitos conocidos. La publicidad y las redes sociales pueden reforzar

la gratificación inmediata, asociar consumo con estatus y presentar el crédito como extensión del ingreso.

Las desigualdades educativas y digitales también explican la problemática. La autoevaluación de conocimiento financiero en Colombia fue menor entre personas con bachillerato o menos que entre quienes tenían educación superior. Esto no significa que un título garantice buenas decisiones, pero sí muestra diferencias en el acceso a vocabulario, herramientas y fuentes. Las personas mayores, rurales o con conectividad limitada pueden enfrentar dificultades para usar plataformas, mientras usuarios jóvenes pueden operar aplicaciones con facilidad sin comprender tasas, protección de datos o consecuencias contractuales. La alfabetización digital desigual crea una doble brecha: algunos no acceden a servicios y otros acceden sin protección suficiente.

Las causas económicas son determinantes. Los ingresos bajos, inestables o informales reducen el margen para planear y ahorrar. Una persona que destina casi todo su ingreso a necesidades básicas puede comprender la importancia del fondo de emergencia y, aun así, no tener capacidad inmediata para constituirlo. La inflación aumenta la presión sobre el presupuesto y obliga a priorizar el corto plazo. La informalidad laboral dificulta acceder a créditos con condiciones adecuadas, lo que puede llevar a opciones costosas. También es frecuente que los hogares combinen obligaciones de consumo, servicios, educación y apoyo a familiares, haciendo más compleja la administración. Por eso, la educación financiera debe ser realista y no presentar la pobreza como resultado de una mala disciplina personal.

La complejidad de los productos y de la información comercial constituye otra causa económica e institucional. Tasas expresadas de formas distintas, seguros asociados, cuotas de manejo, periodos de gracia, intereses de mora y condiciones contractuales pueden resultar difíciles de comparar. Cuando la comunicación se concentra en el monto aprobado o la cuota, el consumidor puede no visualizar el valor total. La asimetría de información entre entidad y usuario es mayor cuando existe urgencia, baja escolaridad o temor a preguntar. Aunque las entidades tienen deberes de información y educación, la calidad y neutralidad de las actividades puede variar; una capacitación ligada a la venta corre el riesgo de confundirse con promoción comercial.

En el plano político, Colombia ha desarrollado un marco de educación económica y financiera. El Decreto 457 de 2014 creó un sistema administrativo nacional y una comisión intersectorial, y el Decreto 1068 de 2015 integró disposiciones para coordinar acciones. Sin embargo, la implementación enfrenta fragmentación entre instituciones, entidades financieras, centros educativos y territorios. La encuesta muestra que 69,5 % no conocía programas gratuitos y 82,8 % no sabía cómo acceder a ellos. Esto revela una causa de política pública: no basta con producir contenidos; es necesario divulgarlos, adaptarlos, acompañar a los usuarios y medir cambios de comportamiento. La oferta puede existir sin llegar a quienes más la necesitan.

La aceleración tecnológica ha añadido nuevos desafíos. Los depósitos digitales, transferencias inmediatas, comercios electrónicos y créditos en línea reducen tiempos y costos, pero también la pausa para reflexionar. Una decisión puede tomarse en minutos desde el teléfono, guiada por notificaciones o recomendaciones algorítmicas. Al mismo tiempo, falsos prestamistas, enlaces de suplantación y esquemas de inversión circulan por los mismos canales. La educación institucional suele reaccionar después de que aparecen los riesgos, mientras las modalidades de fraude cambian rápidamente. Esto explica por qué la alfabetización financiera debe actualizarse y conectarse con ciberseguridad.

Finalmente, existen causas relacionadas con el diseño de la formación. Cursos extensos, lenguaje técnico y ejemplos alejados de la realidad disminuyen la participación. El 67,9 % de los encuestados solo podría dedicar dos horas semanales o menos y 41,6 % señaló falta de tiempo como

barrera. Si el aprendizaje exige horarios rígidos o conocimientos previos, favorece a quienes ya tienen mejores condiciones. La propuesta de Humanidades Digitales responde a esta causa al combinar contenidos breves, interacción en redes, webinar y entrevista. Para ser efectiva, debe usar situaciones reales, permitir preguntas, ofrecer herramientas editables y evaluar el aprendizaje. En conclusión, el problema se origina en una trayectoria de exclusión, desigualdad,

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

informalidad, complejidad financiera, cambios tecnológicos y limitada articulación educativa. Reconocer estas causas evita culpabilizar a las personas y orienta soluciones más justas y sostenibles.

Efectos: sociales, culturales, ambientales y políticos · mínimo 600 palabras

Describe las consecuencias sociales, culturales, ambientales y políticas que ha traído este problema a los contextos local, nacional y latinoamericano.

La insuficiencia de conocimientos y hábitos financieros produce efectos sociales que se manifiestan en el bienestar cotidiano. Cuando un hogar no registra sus gastos ni anticipa pagos, aumenta la probabilidad de quedarse sin liquidez antes de finalizar el mes, recurrir a préstamos para cubrir necesidades básicas o atrasarse en servicios y obligaciones. El problema puede generar estrés, discusiones familiares, sensación de fracaso y reducción de proyectos educativos o productivos. La falta de un fondo de emergencia hace que una enfermedad, pérdida de empleo o reparación imprevista tenga consecuencias mayores. En Neiva y Huila, donde conviven empleos formales, comercio y actividades con ingresos variables, la capacidad de adaptar el presupuesto resulta especialmente importante.

Otro efecto social es la desigualdad en el aprovechamiento de la inclusión financiera. Las personas con mayor educación, ingresos estables y apoyo técnico pueden comparar productos, proteger datos y utilizar cuentas para ahorrar o invertir. Quienes tienen menor escolaridad o recursos pueden conservar productos inactivos, pagar costos evitables o exponerse a fraudes. Así, una cobertura alta no elimina la exclusión; puede surgir una exclusión de calidad, en la que el usuario está dentro del sistema pero no obtiene beneficios equivalentes. Las diferencias de género, edad, ruralidad e ingresos observadas en América Latina muestran que la brecha de capacidades puede reproducir otras desigualdades.

En el ámbito cultural, la falta de educación financiera consolida hábitos y creencias que limitan la autonomía. Guardar todo el ahorro en efectivo, evitar conversaciones sobre deudas, elegir por recomendación sin comparar o considerar normal vivir permanentemente al límite pueden convertirse en prácticas transmitidas entre generaciones. También puede difundirse una cultura de consumo inmediato, donde el valor personal se asocia con bienes adquiridos y el crédito se interpreta como ingreso adicional. La educación financiera no debe imponer un único estilo de vida, pero sí permitir que las decisiones sean conscientes y coherentes con metas propias.

La desinformación tiene efectos sobre la confianza. Una mala experiencia con un crédito, una comisión no comprendida o un fraude puede llevar a rechazar todo el sistema financiero. Al contrario, la confianza excesiva puede hacer que una persona entregue datos o dinero a actores no vigilados. En ambos extremos se reduce la capacidad de elegir. La prevención exige comprender derechos, deberes, canales de reclamación y límites de las promesas comerciales. Cuando los consumidores cuentan con criterios, pueden relacionarse con las entidades de manera más equilibrada y exigir transparencia.

Los efectos políticos aparecen en la relación entre ciudadanía, regulación y protección al consumidor. Una población que desconoce sus derechos participa menos en mecanismos de queja, control y deliberación sobre políticas financieras. Esto reduce la presión para mejorar productos, información y atención. Además, la proliferación de pirámides, captación ilegal y fraude puede generar demandas de respuesta estatal, pérdida de recursos colectivos y desconfianza institucional. La educación financiera fortalece ciudadanía económica porque permite reconocer entidades responsables, verificar información pública y tomar decisiones que no dependan exclusivamente de publicidad o rumores.

En la dimensión digital, el desconocimiento facilita suplantaciones, robo de credenciales y pérdida de ahorros. La encuesta nacional muestra inseguridad

para reconocer correos, sitios y mensajes fraudulentos. Una víctima no solo pierde dinero; también puede quedar endeudada, sufrir afectaciones en su

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

historial y experimentar vergüenza que impide denunciar. Los fraudes se expanden rápidamente por redes y mensajería, por lo que un caso individual puede afectar a familiares y comunidades. Enseñar protocolos simples de verificación y canales oficiales genera un efecto preventivo multiplicador.

Los efectos ambientales son indirectos, pero relevantes. Las decisiones financieras influyen en patrones de consumo, uso de recursos y capacidad de responder a eventos climáticos. La compra impulsiva y el reemplazo frecuente de bienes aumentan residuos; la falta de planificación dificulta invertir en reparaciones, eficiencia energética o movilidad sostenible. Los hogares con poca resiliencia son más vulnerables ante inundaciones, sequías, altas temperaturas u otros eventos que afectan ingresos y gastos. También pueden no comprender productos de seguro o financiación asociados con adaptación y energías limpias. No se debe afirmar que la falta de educación financiera causa por sí sola el deterioro ambiental, pero sí que limita la capacidad de evaluar costos de largo plazo y adoptar decisiones de consumo responsable.

A nivel latinoamericano, la baja resiliencia financiera significa que millones de hogares podrían cubrir pocos meses si pierden sus ingresos. Esta fragilidad amplifica crisis económicas, sanitarias o ambientales y obliga a estrategias como vender activos, retirar ahorros destinados a otras metas o asumir deudas costosas. A nivel nacional, afecta productividad, estabilidad familiar y calidad de la inclusión. A nivel local, se expresa en decisiones concretas de personas que solicitan crédito sin una visión completa de su presupuesto. La intervención propuesta busca reducir estos efectos mediante conocimiento aplicado, pero debe reconocer sus límites: una formación breve no sustituye ingresos dignos, regulación ni productos adecuados.

El resultado esperado es preventivo y de fortalecimiento. Si los participantes aprenden a registrar gastos, formular una meta, calcular un costo básico, comparar opciones y reconocer fraudes, aumentan su margen de decisión. Estos cambios pueden reducir estrés, mejorar conversaciones familiares, proteger recursos y fortalecer la confianza informada. El efecto social más importante no será memorizar definiciones, sino ejercer mayor autonomía frente al dinero y compartir prácticas responsables en la comunidad.

PROBLEMÁTICA 2

Nombre de la problemática

Enuncie de forma breve la problemática seleccionada.

Sobreendeudamiento y uso inadecuado del crédito formal e informal, asociado a decisiones financieras poco informadas.

Análisis a nivel local · mínimo 700 palabras

A partir de la situación identificada en el territorio o comunidad, ubique los principales hallazgos que permiten caracterizarla a nivel local. Apóyese en informes, datos estadísticos y los documentos sugeridos.

La segunda problemática se formula como sobreendeudamiento y uso inadecuado del crédito formal e informal, asociado a decisiones poco informadas. En Neiva y Huila, esta problemática puede observarse en personas que acumulan varias cuotas, refinancian obligaciones sin reducir el capital, utilizan crédito para cubrir gastos recurrentes o recurren a prestamistas informales cuando ya no tienen margen en el sistema. El estudiante, por trabajar como analista financiero y relacionarse con asesores de crédito, cuenta con un punto de observación privilegiado, aunque debe separar la intervención

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

académica de cualquier proceso comercial y proteger la información de los clientes. La caracterización local se realizará con datos agregados, experiencias anonimizadas y una encuesta voluntaria, sin divulgar nombres, saldos ni historias individuales.

El Reporte de Inclusión Financiera 2024 muestra que Huila tiene una presencia amplia de servicios financieros. Bajo la medición ampliada, aproximadamente 54,5 % de los adultos del departamento tenía algún financiamiento formal; 41,8 % estaba vinculado con el sector financiero ampliado y 39,4 % con el sector financiero tradicional. Estas cifras indican que el crédito forma parte de la vida económica de una proporción importante de la población. El acceso puede apoyar vivienda, educación, emprendimiento y consumo duradero, pero también eleva la necesidad de comprender condiciones y administrar obligaciones. El dato no permite afirmar cuántas personas están sobreendeudadas, por lo cual el proyecto no debe presentar el endeudamiento como diagnóstico universal. Sí permite justificar una acción preventiva en una comunidad expuesta a decisiones crediticias frecuentes.

En la práctica local, una señal de riesgo aparece cuando la persona evalúa cada cuota por separado y no la suma con arriendo, servicios, alimentación, transporte, obligaciones familiares y otras deudas. Otra señal es tomar un nuevo crédito para pagar cuotas anteriores sin un plan de reorganización. También existe riesgo cuando se elige el plazo más largo solo porque reduce la cuota, ignorando que aumenta el costo total, o cuando no se diferencia entre deuda productiva, deuda de consumo y gasto básico. La educación financiera debe enseñar una evaluación sencilla de capacidad de pago basada en ingresos netos, gastos esenciales, obligaciones vigentes y un margen para imprevistos.

La encuesta nacional aporta elementos que probablemente se reflejan en el territorio. Solo 29,6 % de las personas afirmó saber calcular intereses y 63,7 % reconoció que no podía hacerlo. Esta brecha afecta la comparación entre créditos. El usuario puede identificar la cuota ofrecida, pero no comprender la tasa efectiva anual, la relación entre plazo e intereses, el costo de seguros o las consecuencias de la mora. En contextos de baja alfabetización numérica, la explicación debe partir de ejemplos con valores cercanos y tablas simples, no de fórmulas abstractas. Los asesores de crédito que participen en el proyecto pueden ayudar a traducir conceptos, siempre que la información sea neutral y no se oriente a vender.

El crédito informal requiere atención específica. En barrios, comercios y redes personales pueden circular préstamos rápidos sin requisitos, créditos de mercadería, cadenas o modalidades de cobro diario. Algunos satisfacen necesidades que el sistema formal no cubre, pero pueden imponer costos altos, cobros agresivos o falta de documentación. La urgencia y la recomendación de un conocido disminuyen la comparación. En la comunidad local, la intervención debe enseñar a reconocer señales de alerta: promesas de desembolso a cambio de pagos anticipados, ausencia de contrato, tasas no explicadas, presión para entregar datos, cobros diarios que no se relacionan claramente con el capital y prestamistas que se presentan como entidades vigiladas sin serlo.

El sobreendeudamiento también puede surgir de choques externos. Pérdida de empleo, enfermedad, reducción de ventas o aumento de precios transforman una obligación inicialmente manejable en una carga difícil. En Huila, los hogares vinculados al comercio, servicios, agricultura o trabajo independiente pueden tener ingresos variables. Por eso, no sería responsable presentar toda mora como falta de disciplina. La educación financiera debe incluir qué hacer temprano: revisar el presupuesto, contactar a la entidad antes de acumular atrasos, solicitar información sobre alternativas, evitar ocultar la situación y priorizar necesidades básicas. También debe explicar que una refinanciación puede dar alivio de flujo, pero debe evaluarse por costo y plazo.

Los efectos familiares son visibles cuando una deuda individual compromete ingresos colectivos. Puede generarse presión para que familiares sirvan

como codeudores, presten dinero o asuman pagos. Las discusiones aumentan si las obligaciones fueron ocultadas o destinadas a consumos no acordados. Una actividad de responsabilidad social puede promover conversaciones no estigmatizantes sobre metas, límites y responsabilidades. El

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

presupuesto familiar, cuando se construye de manera participativa, permite identificar cuánto puede destinarse a deuda y evita que toda la carga recaiga en una sola persona.

La intervención local debe comenzar con una medición. Se propone preguntar de forma anónima cuántas obligaciones tiene el participante, si conoce el costo total, si ha usado un crédito para pagar otro, si podría cubrir una cuota ante una reducción de ingresos, si compara ofertas y si sabe a quién acudir frente a dificultades. No se solicitarán montos sensibles ni datos personales. Con los resultados se ajustarán las publicaciones y el webinar. La meta no es identificar “malos pagadores”, sino reconocer necesidades educativas y reducir riesgos.

En conclusión, el contexto local combina acceso significativo al financiamiento, conocimientos limitados sobre intereses, ingresos heterogéneos y circulación de ofertas formales e informales. La problemática es adecuada para complementar el tema general de educación financiera y se conecta directamente con la experiencia del estudiante. Su tratamiento debe centrarse en prevención, capacidad de pago, costo total, señales de alerta y rutas de orientación. Así, el proyecto puede aportar a que el crédito vuelva a ser una herramienta para metas y no una respuesta automática a la falta de planificación.

Análisis a nivel nacional · mínimo 700 palabras

Ubique los principales hallazgos que permiten caracterizar la problemática en el país. Apóyese en informes, datos estadísticos y los documentos sugeridos.

En Colombia, el sobreendeudamiento y el uso inadecuado del crédito deben analizarse sin confundir el acceso al financiamiento con un resultado negativo. El crédito cumple funciones sociales y económicas importantes: permite adquirir vivienda, financiar educación, sostener negocios, cubrir inversiones productivas y distribuir el costo de bienes duraderos. El problema aparece cuando las obligaciones superan la capacidad real de pago, se utilizan para cubrir permanentemente gastos básicos, se contratan sin comprender el costo total o se acumulan en canales formales e informales. Por ello, una formulación responsable no sostiene que toda deuda sea perjudicial, sino que identifica las condiciones que convierten el crédito en una fuente de vulnerabilidad.

El Reporte de Inclusión Financiera 2024 indica que 13,8 millones de adultos, equivalentes a 35,5 % de la población adulta, tenían al menos un crédito en el sector financiero tradicional. Al ampliar la medición a otros actores formales financieros y no financieros, 19,6 millones de adultos, o 50,5 %, tenían algún financiamiento formal (Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades, 2025). La expansión aumenta las posibilidades de inclusión, pero también exige información comparable, evaluación de riesgos y educación. La misma fuente señala diferencias por edad, género y territorio, lo que evidencia que la relación con el crédito no es homogénea.

La falta de comprensión de intereses constituye una causa directa de decisiones inadecuadas. Solo 29,6 % de los encuestados por la Superintendencia Financiera manifestó saber calcular los intereses de un préstamo, mientras 63,7 % dijo no saber hacerlo. Esto significa que una gran parte de la población puede depender de la cuota informada o de la explicación del oferente. Dos créditos con cuotas parecidas pueden tener plazos, tasas, seguros y costos totales muy diferentes. Sin herramientas para comparar, el consumidor puede optar por la alternativa que parece más accesible en el corto plazo y terminar pagando más o comprometiéndose durante más tiempo.

El comportamiento de los hogares también incide. Cuando no existe presupuesto ni registro de gastos, la capacidad de pago se calcula de manera intuitiva. La persona puede restar la cuota de su ingreso sin incluir gastos variables, obligaciones informales, mantenimiento, salud o

emergencias. La

encuesta nacional muestra que 42,1 % no hacía presupuesto, 53,8 % no registraba gastos y 55,6 % no tenía metas financieras. Estas condiciones no

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

producen automáticamente sobreendeudamiento, pero reducen la posibilidad de anticiparlo. El riesgo aumenta con créditos rotativos, compras a plazos y múltiples obligaciones de bajo monto, porque la suma puede pasar desapercibida.

El crédito informal y la captación ilegal agravan el panorama. En situaciones de urgencia, desempleo o baja capacidad de demostrar ingresos, algunas personas recurren a prestamistas, aplicaciones no verificadas o esquemas que prometen desembolsos inmediatos. Estas alternativas pueden incluir tasas elevadas, cobros diarios, acceso abusivo a contactos del teléfono o amenazas. También existen falsos créditos que exigen un pago anticipado y desaparecen. La inseguridad reportada para identificar falsos prestamistas y mensajes fraudulentos confirma que la prevención debe formar parte de cualquier estrategia contra el sobreendeudamiento.

Las presiones macroeconómicas influyen en la capacidad de pago. Inflación, desempleo, informalidad y variación de ingresos pueden deteriorar el presupuesto después de contratar una obligación. Una cuota que inicialmente representaba una proporción razonable puede competir luego con alimentos, vivienda o salud. Por eso, la responsabilidad no puede atribuirse solamente al consumidor. Las entidades deben evaluar adecuadamente el riesgo, explicar condiciones y ofrecer productos coherentes con el perfil del usuario; el Estado debe supervisar y proteger; y las políticas económicas deben atender las causas de la vulnerabilidad.

El sobreendeudamiento tiene una dimensión de salud y convivencia. La preocupación por las deudas puede generar ansiedad, insomnio, conflictos de pareja, aislamiento y disminución del desempeño laboral. En algunos hogares se ocultan obligaciones por vergüenza, lo que retrasa la búsqueda de ayuda. La educación financiera debe evitar mensajes culpabilizantes y promover una acción temprana. Revisar el presupuesto, priorizar, contactar acreedores, verificar información y abstenerse de tomar nuevos créditos sin análisis son medidas más útiles que la condena moral.

En el plano institucional, Colombia dispone de normas de protección al consumidor financiero y de programas de educación, pero existe una brecha de conocimiento y acceso. La plataforma gratuita de la Superintendencia incluye módulos sobre características del crédito, derechos y deberes, habeas data y consulta de productos. Sin embargo, 69,5 % no sabía que existían programas gratuitos y 82,8 % no sabía cómo acceder. Esta desconexión favorece que la información llegue después de la contratación o cuando la mora ya se ha presentado. Las entidades, universidades y comunidades pueden actuar como puentes hacia fuentes oficiales.

Una política preventiva nacional debería incluir educación desde la escuela, información estandarizada de costo total, simuladores comprensibles, alertas tempranas y rutas de acompañamiento. También debe diferenciar entre una persona con ingresos estables y otra con ingresos variables, entre crédito productivo y consumo, y entre una renegociación útil y una refinanciación que solo prolonga la deuda. La medición de impacto no puede limitarse al número de asistentes; debe verificar si el participante identifica su nivel de endeudamiento, compara ofertas y conoce pasos ante una dificultad.

En síntesis, el problema nacional surge de la combinación de acceso creciente, baja comprensión de intereses, falta de planificación, vulnerabilidad económica y ofertas complejas. El crédito puede ampliar oportunidades, pero requiere decisión informada. El plan de Humanidades Digitales contribuye al traducir estas ideas en contenidos accesibles y en una conversación con una experta. Su enfoque preventivo es pertinente porque actúa antes de la mora y fortalece capacidades que pueden aplicarse en múltiples productos y momentos de la vida.

Análisis a nivel global (Latinoamérica) · mínimo 700 palabras

Ubique los principales hallazgos que permiten caracterizar la problemática a nivel latinoamericano. Tenga en cuenta informes y datos estadísticos.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

En América Latina y el Caribe, el sobreendeudamiento y el uso inadecuado del crédito están vinculados con una estructura económica caracterizada por desigualdad, empleo informal, baja resiliencia y coexistencia de canales formales e informales. El Global Findex 2025 indica que 53,4 % de los adultos de la región había pedido dinero prestado de alguna fuente, mientras 28,5 % lo había hecho formalmente (Banco Mundial, 2025). La diferencia muestra que una parte considerable depende de familiares, comercios, prestamistas u otros mecanismos. Estas fuentes pueden resolver necesidades rápidas, pero no siempre ofrecen información clara, protección o costos razonables.

La capacidad para afrontar emergencias es limitada. Solo 54,6 % consideró que no sería difícil conseguir dinero adicional en treinta días y apenas 34,7 % podría cubrir sus gastos por más de dos meses si perdiera su ingreso principal. Entre mujeres y personas del 40 % de menores ingresos, la posibilidad de reunir fondos era todavía menor. Cuando un hogar no tiene reserva, cualquier choque puede convertirse en deuda. El crédito se usa entonces no para una inversión planificada, sino para conservar consumo básico, pagar salud o reemplazar ingresos. Si la causa persiste, el hogar puede encadenar obligaciones.

La informalidad laboral desempeña un papel central. Millones de trabajadores reciben ingresos variables, carecen de contratos estables o dependen de ventas y actividades por cuenta propia. Los modelos tradicionales de crédito pueden excluirlos o asignarles condiciones menos favorables. En respuesta, surgen mecanismos alternativos de financiación. Algunos innovan de manera positiva; otros aprovechan la urgencia mediante costos altos o prácticas abusivas. La educación financiera debe ayudar a comparar, pero no resolverá por sí sola la falta de productos adecuados y de protección laboral.

La digitalización ha transformado el crédito regional. Teléfonos y aplicaciones permiten solicitar montos en minutos, usar compras diferidas y recibir ofertas personalizadas. Esto reduce barreras, pero también favorece decisiones impulsivas, porque disminuye el tiempo entre deseo y contratación. Las plataformas pueden presentar la cuota de forma destacada y dejar tasas o costos en textos extensos. Además, aplicaciones fraudulentas solicitan acceso a contactos y archivos, lo que puede utilizarse para presión y extorsión. La alfabetización financiera debe incluir lectura digital, permisos, privacidad y verificación regulatoria.

Las diferencias culturales influyen en la percepción de la deuda. En algunos contextos, pedir prestado a familiares se considera parte normal de la solidaridad; en otros, hablar de dificultades financieras produce vergüenza. También existe una asociación entre consumo, éxito y pertenencia social, alimentada por publicidad y redes. Las decisiones de crédito pueden responder a celebraciones, tecnología, moda o expectativas familiares. No corresponde juzgar estas metas, pero sí promover preguntas: ¿el bien genera valor duradero?, ¿la cuota cabe en el presupuesto?, ¿qué se sacrifica?, ¿qué pasaría si el ingreso disminuye?

La inflación y las crisis económicas agravan el riesgo. El aumento de precios reduce el ingreso disponible y obliga a usar tarjetas, crédito de comercio o préstamos para alimentos y servicios. Si las tasas son altas, la deuda crece más rápido que la capacidad de pago. En países con volatilidad monetaria, las familias también enfrentan incertidumbre sobre el costo futuro. La educación financiera necesita explicar tasas reales, inflación y escenarios, pero con ejemplos sencillos. Una fórmula sin conexión con la vida cotidiana no modifica el comportamiento.

Las encuestas de capacidades financieras impulsadas por CAF y la metodología OECD/INFE proponen analizar conocimiento, conducta, actitudes, resiliencia y bienestar. Esta visión es útil para comprender el sobreendeudamiento: una persona puede conocer qué es un interés y, aun así, contratar bajo presión emocional, familiar o económica. Por eso, la prevención debe combinar información con herramientas de autocontrol, pausas

antes de

comprar, límites de endeudamiento, metas y acompañamiento. También debe fortalecer la capacidad de reclamar y negociar.

A nivel político y regulatorio, la región presenta marcos diversos. Algunos países han avanzado en protección de datos, transparencia y regulación de

fintech; otros tienen vacíos o baja capacidad de supervisión. Las operaciones digitales cruzan fronteras y dificultan identificar responsables.

La

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

cooperación regional y el intercambio de alertas son necesarios, así como estándares claros de información. Una estrategia de educación sin supervisión puede trasladar toda la responsabilidad al usuario y dejar intactas ofertas engañosas.

Los efectos del sobreendeudamiento trascienden el hogar. Reducen consumo futuro, afectan pequeños negocios, aumentan conflictos y pueden impulsar migración o informalidad. En situaciones extremas, los cobros ilegales comprometen seguridad personal. La prevención tiene valor social porque protege ingresos, relaciones y confianza. También permite que el crédito se utilice para objetivos productivos en lugar de convertirse en una carga acumulativa.

La conexión con Neiva es directa. Las mismas tendencias regionales -digitalización, ingresos variables, redes familiares, baja resiliencia y ofertas inmediatas- aparecen en la comunidad local con características propias. El proyecto puede traducir aprendizajes regionales en herramientas sencillas: mapa de deudas, cálculo de costo total, semáforo de capacidad de pago, señales de fraude y rutas de orientación. Aunque la intervención sea pequeña, contribuye a una cultura latinoamericana de crédito responsable, basada en autonomía, transparencia y prevención.

Causas: históricas, socioculturales, políticas y económicas · mínimo 700 palabras

Describe las razones y hechos históricos, socioculturales, políticos y económicos que originan el problema.

El sobreendeudamiento y el uso inadecuado del crédito tienen causas históricas relacionadas con la desigual distribución del acceso al sistema financiero. Durante décadas, amplios sectores de Colombia y América Latina quedaron por fuera del crédito bancario por ubicación, ingresos, informalidad o falta de garantías. Para atender necesidades surgieron préstamos familiares, tiendas, prestamistas y mecanismos comunitarios. Algunos cumplieron una función de inclusión, pero otros consolidaron costos elevados y relaciones de dependencia. La expansión posterior del crédito formal no eliminó esas prácticas; se superpuso a ellas, por lo que una persona puede mantener obligaciones con bancos, comercios, cooperativas, aplicaciones y prestamistas al mismo tiempo.

La transformación del consumo constituye otra causa histórica y cultural. El desarrollo de mercados masivos, tarjetas, compras a plazos y publicidad convirtió el crédito en una herramienta cotidiana. Esta democratización permitió adquirir bienes antes inaccesibles, pero también normalizó anticipar ingresos futuros. En redes sociales, el consumo visible puede asociarse con éxito y aceptación. La presión por sostener cierto estilo de vida influye especialmente en jóvenes y hogares que buscan responder a expectativas familiares. Las decisiones no se explican solo por necesidad económica; también por emociones, identidad y reconocimiento.

Entre las causas socioculturales se encuentran el silencio y el estigma. Muchas familias no hablan abiertamente de ingresos y deudas, por lo que cada integrante toma decisiones con información parcial. Una persona puede ocultar una obligación por miedo a ser juzgada, y pedir ayuda cuando ya se acumularon atrasos. También se transmiten mitos: “mientras alcance para la cuota, el crédito cabe”, “refinanciar siempre mejora” o “un préstamo recomendado por un amigo es seguro”. La influencia de familiares, reconocida por la encuesta nacional, puede fortalecer o debilitar la decisión según la calidad de la información.

Los sesgos de comportamiento son una causa relevante. Las personas tienden a valorar más el beneficio inmediato que el costo futuro, a subestimar la probabilidad de perder ingresos y a dividir mentalmente las cuotas sin sumar la carga total. Una oferta con aprobación rápida produce sensación de oportunidad; una cuota baja puede ocultar un plazo largo. También existe exceso de confianza en la capacidad futura: se supone que habrá aumento salarial, mejores ventas o ingresos extraordinarios. Estos sesgos son humanos y no se corrigen únicamente con advertencias; requieren

herramientas
que hagan visible el costo y establezcan pausas.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

La baja alfabetización financiera facilita el problema. Si solo una minoría sabe calcular intereses, la comparación depende de explicaciones ajenas.

Conceptos como tasa nominal, efectiva, plazo, seguro, amortización y mora pueden resultar confusos. Los contratos y extractos utilizan lenguaje especializado, mientras la publicidad simplifica el mensaje. Esta asimetría de información permite que el consumidor conozca el beneficio inmediato, pero no siempre el compromiso completo. La educación previa a la contratación es, por tanto, una medida de protección.

Las causas económicas incluyen ingresos insuficientes, inestables e informales. Un hogar que no cubre necesidades básicas puede usar crédito para

alimentación, servicios o transporte. En ese caso, la deuda no se origina en consumo irresponsable, sino en una brecha estructural entre ingreso y gasto.

La inflación y el desempleo pueden deteriorar obligaciones ya adquiridas. Los trabajadores por cuenta propia enfrentan temporadas buenas y malas, pero las cuotas permanecen fijas. La ausencia de ahorro de emergencia hace que cada choque se financie con una nueva deuda.

La oferta de productos también influye. El crecimiento del crédito de comercio, cupos rotativos, pagos diferidos y aplicaciones amplía alternativas, pero

fragmenta la información. Cada proveedor evalúa una parte del historial y el usuario puede acumular compromisos pequeños. Cuando los incentivos

comerciales priorizan colocación y volumen, existe riesgo de que la educación se reduzca a cumplir requisitos. La responsabilidad de las entidades

incluye evaluar capacidad, explicar escenarios y evitar prácticas que exploten vulnerabilidades.

En el ámbito político, persisten desafíos de regulación y coordinación. El sistema financiero tradicional está supervisado, pero nuevos actores,

plataformas y prestamistas informales pueden quedar en zonas grises o actuar ilegalmente. La educación pública y los canales de denuncia no siempre

son conocidos. Además, las políticas de inclusión pueden medir principalmente la apertura de productos y no la calidad del uso. La alta cobertura puede

interpretarse como éxito aunque existan inactividad, costos, fraude o sobreendeudamiento. Se necesitan indicadores de bienestar y resiliencia.

La tecnología acelera la contratación y el fraude. Algoritmos, publicidad segmentada y notificaciones pueden ofrecer crédito justo cuando el usuario

muestra intención de compra. Las decisiones se vuelven menos deliberadas. Las aplicaciones fraudulentas imitan marcas, solicitan anticipos o utilizan

datos personales para intimidar. La falta de competencias digitales se combina con la necesidad urgente de dinero, creando un entorno de alto riesgo.

La regulación debe actualizarse, pero la comunidad también necesita señales prácticas de verificación.

Finalmente, la falta de acompañamiento temprano favorece la acumulación. Muchas personas desconocen qué hacer cuando anticipan una dificultad y

esperan hasta la mora. El temor a reportes negativos o cobros evita el contacto con la entidad. También pueden aceptar refinanciaciones sin evaluar el

nuevo costo. Una intervención educativa debe normalizar la revisión periódica, promover comunicación anticipada y mostrar rutas oficiales.

En síntesis,

el sobreendeudamiento surge de desigualdad, consumo cultural, sesgos, baja alfabetización, ingresos frágiles, productos complejos, incentivos

comerciales, vacíos regulatorios y ausencia de apoyo. La respuesta debe distribuir responsabilidades y no reducirse a aconsejar “gastar menos”.

Efectos: sociales, culturales, ambientales y políticos · mínimo 600 palabras

Describe las consecuencias sociales, culturales, ambientales y políticas que ha traído este problema a los contextos local, nacional y latinoamericano.

El sobreendeudamiento produce efectos sociales inmediatos porque reduce el ingreso disponible para alimentación, vivienda, salud, educación y

transporte. Cuando varias cuotas absorben una parte alta del presupuesto, el hogar pierde capacidad de responder a imprevistos. Puede recurrir a

nuevos préstamos, vender bienes o atrasar servicios, creando una espiral. En Neiva, este efecto puede observarse en trabajadores y

pequeños

comerciantes cuyos ingresos varían, pero cuyas obligaciones permanecen fijas. La consecuencia no se limita al deudor: familiares, codeudores y dependientes también soportan la presión.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

La salud mental y la convivencia pueden deteriorarse. La preocupación constante por cobros y fechas de pago genera ansiedad, insomnio, irritabilidad y dificultades de concentración. El ocultamiento de deudas produce conflictos de pareja y pérdida de confianza. La vergüenza impide pedir orientación y favorece decisiones desesperadas. Una educación responsable debe usar lenguaje no estigmatizante y mostrar que buscar ayuda temprano es una conducta preventiva, no un fracaso.

En el plano económico, el pago de intereses reduce recursos para ahorro e inversión. Los hogares pierden capacidad de financiar educación, vivienda o emprendimientos. Los pequeños negocios pueden mezclar deuda personal y empresarial, dificultando conocer su rentabilidad. Cuando el crédito se utiliza para cubrir pérdidas permanentes, retrasa decisiones de ajuste y aumenta la exposición. A nivel nacional, una población financieramente frágil es menos capaz de sostener consumo y recuperación frente a crisis.

Los efectos culturales incluyen la normalización de vivir con múltiples cuotas y la idea de que el crédito disponible equivale a ingreso. También puede aparecer el extremo contrario: después de una mala experiencia, la persona rechaza todo producto formal y retorna a efectivo o préstamos informales. Ambas respuestas reducen autonomía. La cultura financiera deseable no promueve endeudarse ni evitar siempre el crédito; promueve decidir según metas, capacidad y costo.

El crédito informal abusivo añade riesgos de seguridad. Cobros diarios, amenazas, exposición de datos y presión sobre familiares pueden afectar la integridad de las personas. Las aplicaciones que acceden a contactos convierten una obligación en mecanismo de humillación pública. A nivel latinoamericano, estas prácticas se benefician de la informalidad y de la dificultad para denunciar. La prevención de fraude y la verificación de entidades son, por tanto, componentes centrales del bienestar.

Los efectos políticos e institucionales se reflejan en la confianza y en la demanda de regulación. Cuando los consumidores perciben información incompleta o cobros injustos, disminuye la confianza en entidades y autoridades. Si desconocen sus derechos, presentan menos reclamaciones y los problemas permanecen invisibles. La proliferación de actores no vigilados exige coordinación entre supervisión financiera, protección de datos, justicia y educación. Una ciudadanía informada puede denunciar, comparar y exigir transparencia.

La dimensión ambiental es indirecta. El endeudamiento asociado a consumo impulsivo puede aumentar compra y descarte de bienes, especialmente tecnología, moda y artículos de corta duración. A la vez, un hogar sobreendeudado tiene menor capacidad para invertir en reparaciones, eficiencia energética, seguros o adaptación ante eventos climáticos. Después de una inundación o pérdida productiva, la falta de reserva puede obligar a asumir créditos costosos. No se debe atribuir el daño ambiental al deudor, pero sí reconocer que las decisiones financieras y de consumo están conectadas con sostenibilidad y resiliencia.

En Colombia y América Latina, los hogares con menor ingreso y las mujeres presentan menor capacidad para reunir dinero de emergencia. Esto hace que los efectos del endeudamiento sean desiguales. Una misma cuota representa una carga distinta según estabilidad laboral, responsabilidades de cuidado y patrimonio. Las políticas y programas deben evitar recomendaciones universales y considerar vulnerabilidades. La educación debe acompañarse de productos adecuados y protección.

El historial crediticio puede verse afectado por atrasos, limitando acceso futuro a vivienda, educación o emprendimiento. Algunas personas recurren entonces a actores más costosos, profundizando la exclusión. En cambio, una intervención preventiva puede ayudar a identificar señales tempranas,

organizar un mapa de obligaciones y tomar decisiones antes del incumplimiento. El efecto esperado del proyecto es reducir riesgos, no resolver deudas particulares.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

En síntesis, el sobreendeudamiento afecta bienestar, relaciones, salud, oportunidades, seguridad y confianza pública. Sus consecuencias locales se conectan con tendencias nacionales y regionales de baja resiliencia y crédito informal. Las publicaciones, el webinar y la entrevista pueden contribuir al enseñar capacidad de pago, costo total, señales de alerta y rutas de orientación. El éxito se medirá cuando los participantes comprendan su situación y adopten una acción concreta, como registrar todas las obligaciones, evitar un nuevo crédito impulsivo o consultar una fuente oficial.

Reflexión personal

Escriba un párrafo en el que exprese las emociones y percepciones que surgieron durante la indagación (por ejemplo, preocupación, empatía o sentido de responsabilidad) y analice cómo esta investigación le afectó.

Durante la indagación sentí preocupación al comprobar que el acceso a cuentas y créditos ha crecido más rápido que la capacidad de muchas personas para tomar decisiones informadas. También experimenté empatía, porque desde mi trabajo como analista financiero puedo observar que una equivocación no siempre se origina en irresponsabilidad, sino en ingresos variables, urgencias, lenguaje técnico, presión familiar o desconocimiento. Me impactó especialmente que solo una minoría afirme saber calcular intereses y que tantas personas no conozcan programas gratuitos de formación. Esta investigación aumentó mi sentido de responsabilidad: los conocimientos que manejo en el ámbito laboral pueden convertirse en una herramienta de servicio si los comunico con neutralidad, respeto y ejemplos sencillos. Por eso, entiendo la práctica social no como una campaña para ofrecer productos, sino como una oportunidad para fortalecer la autonomía de asesores, clientes y personas cercanas, prevenir el sobreendeudamiento y promover decisiones coherentes con las metas y posibilidades reales de cada hogar.

Parte II. Construcción del plan de trabajo — Humanidades Digitales

Desarrolle el plan de trabajo a partir de una de las problemáticas identificadas, con el fin de abordarla y fortalecer el Proyecto Social de Formación.

1. Seleccione una de las dos problemáticas identificadas en la Parte I.
2. Redacte un objetivo claro, alcanzable, relevante y medible que responda a las necesidades de la comunidad.
3. Establezca mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto, hacer ajustes y garantizar mejora continua.
4. Suba al BLOG el plan de trabajo y la guía multidimensional.

Enlace del BLOG

Pendiente de creación y publicación durante la semana 4. El enlace definitivo se incorporará antes de la entrega.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

Autoría pública o integrantes
del grupo

José Carlos Gómez

Tema escogido

Educación financiera para decisiones responsables: presupuesto, ahorro, crédito y prevención del sobreendeudamiento.

Planeación de publicaciones (Fanpage / Facebook / Instagram)

Nombre de la Fanpage o cuenta
(Facebook / Instagram) y enlace

Finanzas con Propósito - Educación financiera responsable. Enlace pendiente de creación/publicación en la semana 4.

N.º

Tema para publicar

Objetivo de la publicación

Enlace y/o imagen

1

Diagnóstico: ¿cómo manejamos nuestro dinero?

Presentar la problemática y aplicar un sondeo breve sobre presupuesto, ahorro, deudas y conocimientos de intereses. El diagnóstico permitirá adaptar los contenidos sin recolectar datos sensibles.

Carrusel/infografía + enlace a formulario.

Pendiente.

2

Presupuesto práctico y registro de gastos

Enseñar a organizar ingresos fijos o variables, clasificar gastos y utilizar una plantilla semanal o mensual. Cada participante formulará un ajuste concreto a su presupuesto.

Video corto + plantilla editable. Pendiente.

3

Gastos hormiga, consumo impulsivo y metas

Ayudar a reconocer gastos pequeños acumulados, diferenciar necesidades y deseos y vincular una reducción realista con una meta financiera personal o familiar.

Carrusel con reto de 7 días. Pendiente.

4

Ahorro y fondo de emergencia

Explicar opciones formales e informales, seguridad, liquidez y construcción gradual de una reserva.

Promover una meta SMART adaptada a ingresos variables.

Infografía + calculadora sencilla. Pendiente.

5

Crédito responsable: tasa, cuota, plazo y costo total

Fortalecer la capacidad de comparar ofertas, calcular capacidad de pago y reconocer señales de sobreendeudamiento. Aclarar que una cuota menor puede implicar mayor costo total.

Caso comparativo en carrusel/video. Pendiente.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

6

Fraude financiero y rutas de información confiable

Enseñar a verificar entidades, detectar falsos prestamistas y enlaces, proteger claves y consultar programas gratuitos y canales oficiales de orientación.

Checklist descargable + enlaces oficiales.
Pendiente.

Planeación del Webinar / Seminario online

Nota: recuerde notificar la fecha y el enlace de conexión a la docente.

Fecha

Semana 6 - fecha y hora exactas por confirmar con la docente y los participantes.

Tema a desarrollar

Decisiones financieras responsables: presupuesto, ahorro, crédito y prevención del sobreendeudamiento.

Objetivo

Al finalizar una sesión de 60 a 75 minutos, lograr que al menos el 80 % de los participantes complete una actividad práctica de presupuesto, identifique el costo total y dos señales de riesgo de un crédito, y mejore en mínimo 20 puntos porcentuales su resultado entre el diagnóstico inicial y la evaluación final. Se buscará un mínimo de 5 asistentes en vivo y más de 20 visualizaciones acumuladas.

Descripción de la actividad (inicio, desarrollo y cierre).

Inicio (10 minutos): bienvenida, presentación del propósito social, reglas de participación y encuesta diagnóstica de 8 preguntas. Se aclarará que la actividad es educativa, gratuita y no promociona productos ni sustituye asesoría personalizada.

Desarrollo (45 a 50 minutos): 1) presupuesto y registro de gastos con un caso de ingresos variables; 2) gastos hormiga, meta y fondo de emergencia; 3) comparación de dos créditos mediante cuota, plazo, tasa y costo total; 4) semáforo de capacidad de pago y señales de sobreendeudamiento; 5) prevención de falsos prestamistas, enlaces y suplantación. Se utilizarán diapositivas, preguntas en el chat y una plantilla descargable.

Cierre (10 a 15 minutos): resolución de preguntas, evaluación posterior con las mismas competencias del diagnóstico, compromiso individual de una acción aplicable durante los siguientes siete días y socialización de fuentes oficiales gratuitas. Se registrarán asistencia, participación, visualizaciones y satisfacción. La grabación se publicará en la página del proyecto y se notificará previamente a la docente el enlace de conexión.

Planeación de la entrevista a experto(a)

Tema de la entrevista

Errores frecuentes al solicitar crédito y prácticas para prevenir el sobreendeudamiento.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

Fecha

Semana 5 - fecha exacta por confirmar con la experta. Duración mínima: 15 minutos.

Nombre del experto(a) y perfil

Coordinadora de la entidad financiera donde labora el estudiante, con experiencia en análisis financiero, gestión de crédito y orientación a consumidores. Nombre y perfil académico exacto pendientes de autorización. Se solicitará consentimiento informado para grabar y publicar.

Pregunta 1

Desde su experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas antes de solicitar o aceptar un crédito?

Pregunta 2

¿Qué pasos sencillos recomienda para calcular capacidad de pago y comparar la cuota, el plazo, la tasa, los seguros y el costo total?

Pregunta 3

¿Qué señales alertan sobre sobreendeudamiento o fraude y qué rutas confiables debería seguir una persona que anticipa dificultades de pago?

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

Cronograma de ejecución (semanas 4 a 7)

La siguiente secuencia articula las tres actividades exigidas por el proyecto Humanidades Digitales: publicaciones, webinar y entrevista. Las fechas exactas se ajustarán al calendario del aula y se comunicarán a la docente.

Semana
Fase
Actividades principales
Evidencia/meta

Semana 4
Preparación y diagnóstico
Crear blog y cuenta; publicar contenidos 1 y 2; aplicar encuesta inicial; consolidar resultados sin datos personales.

Página activa, 2 publicaciones, mínimo 15 respuestas diagnósticas.

Semana 5
Profundización y entrevista
Publicar contenidos 3 y 4; realizar y editar entrevista con consentimiento; responder comentarios.

2 publicaciones adicionales, entrevista de mínimo 15 minutos y registro de interacción.

Semana 6
Crédito, fraude y webinar
Publicar contenidos 5 y 6; divulgar invitación; ejecutar webinar de 60 a 75 minutos y aplicar evaluación final.

6 publicaciones completas, mínimo 5 asistentes en vivo y meta de 20 visualizaciones.

Semana 7
Seguimiento y evaluación
Publicar grabaciones; revisar métricas; aplicar encuesta de satisfacción y seguimiento; comparar diagnóstico y resultado.

Informe de indicadores, evidencias y reflexión sobre ajustes y aprendizajes.

Mecanismos de seguimiento y evaluación

La evaluación combinará indicadores de ejecución, alcance, aprendizaje, aplicación, calidad y ética. Los resultados se analizarán de manera agregada y se utilizarán para ajustar los contenidos durante las semanas 4 a 7.

Dimensión
Indicador
Meta
Fuente de verificación

Ejecución

Número de actividades realizadas

6 publicaciones, 1 entrevista y 1 webinar

Enlaces, capturas, grabaciones y lista de verificación.

Alcance

Participantes, visualizaciones y reacciones

Mínimo 5 asistentes en vivo, más de 20 visualizaciones y registro de interacción

Estadísticas de la plataforma y lista de asistencia voluntaria.

Aprendizaje

Variación pretest-posttest

Mejora promedio mínima de 20 puntos porcentuales

Cuestionario de 8 preguntas antes y después.

Aplicación

Participantes que definen una acción financiera

Al menos 70 % formula una meta o acción verificable

Compromiso final y seguimiento breve en semana 7.

Calidad

Satisfacción y utilidad percibida

Promedio mínimo de 4 sobre 5

Encuesta anónima de satisfacción y comentarios.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

Dimensión

Indicador

Meta

Fuente de verificación

Ética

Protección de datos y neutralidad

Cero datos financieros sensibles publicados y consentimiento de la experta

Revisión de contenidos, formatos de consentimiento y anonimización.

Instrumento breve de diagnóstico y evaluación

El mismo instrumento se aplicará antes y después de la intervención para comparar resultados. No se solicitarán nombres, números de documento, saldos, entidades ni datos que permitan identificar obligaciones particulares.

1. ¿Elabora un presupuesto mensual o semanal? (Siempre / A veces / Nunca)
2. ¿Registra sus gastos para compararlos con sus ingresos? (Sí / Parcialmente / No)
3. ¿Tiene una meta de ahorro definida con valor y fecha? (Sí / En proceso / No)
4. ¿Podría cubrir un gasto imprevisto sin pedir un nuevo crédito? (Sí / Parcialmente / No)
5. ¿Sabe diferenciar tasa, cuota, plazo y costo total de un crédito? (Sí / Parcialmente / No)
6. Antes de aceptar un crédito, ¿compara al menos dos alternativas? (Siempre / A veces / Nunca)
7. ¿Reconoce dos señales de un falso prestamista o enlace fraudulento? (Sí / Una / Ninguna)
8. ¿Conoce un canal oficial gratuito para aprender o reclamar sobre servicios financieros? (Sí / No)

Criterios éticos y de responsabilidad social

- Neutralidad: los contenidos serán educativos y no promocionarán productos, marcas ni solicitudes de crédito.
- Privacidad: se usarán datos agregados y ejemplos ficticios; no se publicará información financiera de clientes o participantes.
- Consentimiento: la experta autorizará por escrito la grabación y publicación de la entrevista; los participantes conocerán el propósito del formulario.
- Accesibilidad: lenguaje claro, subtítulos cuando sea posible, piezas legibles y recursos que puedan consultarse desde el celular.
- Remisión responsable: ante casos particulares, se orientará a canales oficiales y profesionales competentes, sin emitir asesoría individual fuera del alcance académico.

Referencias

Banco Mundial. (2025). The Little Data Book on Financial Inclusion 2025. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex>

Colombia, Presidencia de la República. (2014). Decreto 457 de 2014, por el cual se organiza el Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y

Financiera.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). OECD/INFE 2023 International Survey of Adult Financial Literacy. OECD Publishing.

Superintendencia Financiera de Colombia. (2024). Resultados de la encuesta sobre preferencias de los consumidores financieros colombianos para recibir

educación financiera. SFC.

La responsabilidad social, una práctica de vida – Anexo

Superintendencia Financiera de Colombia. (2025). Educación financiera para todos: curso virtual gratuito de trece módulos.

<https://www.superfinanciera.gov.co/educacionSFC/>

Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las Oportunidades. (2025). Reporte de Inclusión Financiera 2024. SFC y Banca de las Oportunidades.

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2025). Encuestas y visualizador de capacidades financieras en América Latina y el Caribe. CAF.

Nota de personalización: antes de entregar, completar el enlace del blog y la cuenta, fechas exactas, nombre y perfil autorizado de la experta, y evidencias generadas durante la ejecución.